



Alejandro Corvalán Quiroz

Académico Escuela de Ingeniería y Negocios, Universidad Viña del Mar

Tiempos complejos para las políticas públicas

Los efectos multidimensionales de la pandemia han ido acentuando manifestaciones de una crisis política, social e institucional que se visibilizó a partir del 18 de octubre del 2019. En primer lugar, como sucede en todas las crisis, las urgencias dejan relegados los temas importantes que inciden en el mediano o en el largo plazo y, en consecuencia, se va generando una dicotomía o brecha sobre la calidad de las políticas públicas.

En más de alguna ocasión he utilizado una metodología de trabajo de Dani Rodrik, profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, para el diagnóstico del crecimiento. En este sentido, una estrategia para decidir sobre las prioridades de la política tiene sinópticamente tres pasos: diagnosticar el crecimiento, diseñar política e institucionalizar las reformas. Lo relevante de esta metodología es que nos recuerda que las políticas públicas que elige cada país son, a la larga, el factor determinante del crecimiento económico.

En los últimos meses hemos conocido una serie de datos que nos producen una doble sensación de paradojas. Por ejemplo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) nos entrega una información de que Chile sería líder entre los países emergentes en el apoyo del Estado durante la pandemia, destacando que el impulso fiscal habría sido equivalente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del orden de los 30.000 millones de dólares. Por otro lado, el Banco Mundial publicó un estudio que estima en 2,3 millones de personas de clase media que habían retrocedido a la vulnerabilidad. En otros estudios, Techo-Chile y Fundación Vivienda registraban que durante el 2020 hubo más

de 80.000 familias viviendo en casi mil campamentos, lo que implicó un alza del 74% y 21% en familias y asentamientos, respectivamente, en relación al 2019. El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó durante el 2020 estimaciones donde la población en situación de pobreza de ingresos había aumentado desde un 8,6% el 2017 a un 12,2% al 2020.

En otras palabras, tenemos una brecha de percepciones sobre los datos duros y uno de sus principales e inmediatos desafíos es la necesidad de construir un diagnóstico compartido y, en consecuencia, poder consensuar políticas públicas que enfrenten eficazmente las urgencias y puedan abordar con consistencia técnica y legitimidad social y política los enormes retos que tenemos como país en el mediano y largo plazo.

Finalmente, para darle un aterrizaje regional al diagnóstico de algunos de los desafíos que tenemos como territorio, solo enuncio dos: el primero relativo al mundo del trabajo, comparando las cifras del último trimestre móvil disponible del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con el último trimestre antes del 18 de octubre, donde la población crece a una tasa del 2,0%, pero la fuerza de trabajo ha disminuido en 69 mil personas, un 7,2%; y en el último trimestre móvil hay 94 mil menos empleos que hace 18 meses y los desocupados se han incrementado en casi 25 mil personas en el mismo período, es decir, hay más población, menos fuerza de trabajo, menos empleos y más desempleados que hace un año y medio. El segundo dato duro es que el PIB de la región al 2020 había retrocedido al año 2014 y el PIB per cápita al 2020 estaría a niveles equivalentes al 2010.